

# México bronco, México manso: una reflexión sobre la cultura cívica mexicana

Alan Knight

Este ensayo fue escrito en el verano de 1993 para una conferencia que tuvo lugar en la Universidad de Tulane en septiembre de ese mismo año. Es, por tanto, anterior a la rebelión en Chiapas y a los asesinatos políticos de 1994.<sup>1</sup> Han pasado dos años y nunca se materializó el volumen propuesto en el que se recopilarían las ponencias de la conferencia. Agradezco entonces la oportunidad de publicar este trabajo en *Política y Gobierno*. Por la rapidez con la que fueron sucediendo los acontecimientos durante 1994-1995, consideré minuciosamente volver a escribir la ponencia, cuyos temas centrales (cultura política y violencia) han adquirido ahora importancia dramática. Sin embargo, finalmente decidí sólo añadir un breve *post scriptum*. Ésta no es una excusa para la inercia (al menos no conscientemente), más bien es un modesto intento de hacer lo que se supone deben hacer los científicos sociales: probar hipótesis y modelos a la luz de datos nuevos, tanto para afinar las hipótesis como para contextualizar los datos. Por consiguiente, la mayor parte del ensayo permanece en esencia sin cambios;<sup>2</sup> sólo en el *post scriptum* me presento como “sabio después de los acontecimientos”.

---

Profesor del St. Antony's College, Universidad de Oxford. Traducción del inglés de Mario A. Zamudio Vega.

<sup>1</sup> “Changing Political Traditions in Mexico: Intergovernmental Relations and the Opposition”, ponencia presentada en la Universidad de Tulane, patrocinada por la Tinker Foundation, del 13 al 14 de septiembre de 1993.

<sup>2</sup> Sin embargo, he hecho algunas correcciones y adiciones mínimas, atendiendo a las sugerencias de dos lectores anónimos, cuyos comentarios agradezco.

de las élites<sup>4</sup> y en la teoría de juegos, es decir, en una evaluación más táctica del tipo de régimen.<sup>5</sup> Estos enfoques, que buscan sustraerse a la tendencia determinista de los años sesenta, pueden tener mucho sentido, en particular para los países que han experimentado cambios sucesivos de régimen, pero no es el caso de México. Aunque ha sufrido cambios políticos significativos, por ejemplo entre 1968 y 1993 (como también los hubo entre 1940 y 1968), estos cambios no han fructificado en una democracia representativa (por lo menos como suele definirse ésta, es decir, a través de procedimientos, junto con su concurrente incertidumbre en el resultado).<sup>6</sup> He ahí la razón por la que *The New York Times* agrupa a México con Cuba y Guyana, y los académicos se afanan en encajar a los recalcitrantes mexicanos en su tipología preferida de regímenes.<sup>7</sup>

Por la relativa durabilidad del sistema mexicano, me parece que las explicaciones estructurales y deterministas de los años sesenta podrían, de hecho, ser más importantes de lo que actualmente nos imaginamos. Sugerí en otros trabajos<sup>8</sup> que la Revolución mexicana —en la que incluyo tanto a la revolución armada de 1910-1920 como a la revolución “institucional” de 1920-1940— puede analizarse provechosamente como parte de una larga trayectoria histórica que se ajusta bastante bien a los requisitos de una “revolución burguesa”. En otras palabras, México puede someterse a un estilo de análisis a lo Barrington Moore. En este artículo quiero abordar la cuestión de la cultura cívica de México, utilizando como punto de partida a Almond y Verba y arguyendo que, dadas la estabilidad y durabilidad relativas del sistema mexicano, no es improbable que los rasgos culturales estén profundamente arraigados y, por tanto, se resistan al cambio y apoyen la continuidad. Esto puede parecer obvio y sin discusión.<sup>9</sup> Los expertos

---

<sup>4</sup> Michael Burton, Richard Gunther y John Higley, “Introduction: Elite Transformations and Democratic Regimes”, en John Higley y Richard Gunther (eds.), *Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp.1-37.

<sup>5</sup> Adam Przeworski, *Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.

<sup>6</sup> Przeworski, *op. cit.*, p.10.

<sup>7</sup> Burton, Gunther y Higley, *op. cit.*, p. 6.

<sup>8</sup> Alan Knight, “The Mexican Revolution: Bourgeois? Nationalist? or just a ‘Great Rebellion’?”, *Bulletin of Latin American Research*, vol. 4, núm. 2, 1985, pp. 1-37; y “The Peculiarities of Mexican History: Mexico Compared to Latin America, 1821-1992”, *Journal of Latin American Studies*, núm. 24, Suplemento del Cincuentenario, 1992, pp. 99-144.

<sup>9</sup> Algunos politólogos, por supuesto, desconfían de la idea de “cultura política”, la cual, en manos equivocadas, puede convertirse en una cruda materialización. En Stephen Welch, *The*

entre comunidades.<sup>14</sup> Además, esta cultura no es estática, cambia con el tiempo, aunque no necesariamente con tanta rapidez y unidireccionalidad como algunos análisis suponen<sup>15</sup> y, al igual que la mayoría de los argumentos presentados aquí, estas observaciones no son de ninguna manera particulares de México. Ahora sabemos que estados nacionales supuestamente integrados —como Francia bajo la Tercera República— eran mucho menos homogéneos cultural y políticamente de lo que antes se había creído.<sup>16</sup> Asimismo, la descripción de Almond y Verba de la cultura cívica británica —consensual, racional y bendecida con una “burocracia neutral y responsable” y “unos medios de comunicación autónomos y neutrales”— suena casi peregrina en los noventa.<sup>17</sup>

Por consiguiente, cuando hablo de la cultura política mexicana y recalco su continuidad, no quiero sugerir que el cambio es imposible o marginal ni que México es excepcionalmente único (“como México no hay dos”). De hecho, en México han ocurrido cambios políticos significativos, incluso durante la mejor época de la paz priísta; y éstos continúan, aunque menos abruptamente que los económicos. Sin embargo, los cambios políticos —incluida la reforma— han demostrado, diría yo, su compatibilidad con algunos de los principios básicos permanentes de la política mexicana y, con frecuencia, implican procesos cíclicos, y no lineales, de reforma y renovación. Así, aun cuando el famoso péndulo nacional haya oscilado de izquierda a derecha (o, desde 1976, a la derecha, a la derecha y otra vez a la derecha), las costumbres políticas han tendido a permanecer más uniformes que las políticas nacionales. El gobierno puede buscar distintas metas, perseguir diferen-

---

<sup>14</sup> Wayne A. Cornelius, *Politics and Migrant Poor in Mexico City*, Stanford, Cal., Stanford University Press, 1975. Cornelius hace notar las características extremadamente contrastantes de las seis comunidades urbanas (pobres) de la ciudad de México que él estudió a principios de los años setenta: los componentes que constituyen una metrópoli pueden, por lo tanto, diferir tanto como las poblaciones rurales, cuya diversidad es un lugar común de la antropología y de la historia locales. Los estudiosos de la “cultura política popular” suelen, en consecuencia, descomponer esta noción proteica en subconjuntos locales y regionales (si no es que la rechazan por completo). Knight “Popular Culture and the Revolutionary State in Mexico, 1910-1940”, *Hispanic American Historical Review*, vol. 74, núm. 3, 1994, pp. 393-444.

<sup>15</sup> Como regla práctica general sugeriría que —sin duda en México y quizá en otras partes— los patrones culturales cambian con lentitud, a menudo no siguen la dirección prescrita que indica la teoría de la modernización y suelen obedecer a “grandes fuerzas impersonales” (el mercado, la urbanización, la guerra) en lugar de al manejo social oficial del Estado. El argumento se presentó, respecto al proyecto cultural revolucionario de 1910-1940, en Knight, *op. cit.*, 1994.

<sup>16</sup> Eugen Weber, *Peasant into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914*, Stanford, Stanford University Press, 1976.

<sup>17</sup> Almond y Verba, *op. cit.*, p.6.

a los sobornos o a las conexiones familiares”.<sup>19</sup> Wayne Cornelius, en su estudio sobre los asentamientos urbanos en la ciudad de México a principios de los setenta, encontró algo muy similar: a pesar de la gran desconfianza en los funcionarios, policías y políticos, los encuestados creían abrumadoramente que el gobierno perseguía las metas y los ideales de la Revolución. De hecho, la probabilidad de que los encuestados creyeran que estas metas se habían alcanzado era casi el doble que la correspondiente a que creyeran que se habían olvidado.<sup>20</sup> Evelyn Stevens hizo notar que, aunque se entrevistara a profesionales educados, “la fe en las palabras a menudo parecía coexistir con un cinismo extremo”.<sup>21</sup> Por último, la comparación que hace Kahl entre Brasil y México nos muestra un retrato similar del “mexicano políticamente ambivalente”.<sup>22</sup> Si suponemos que estas conclusiones no están del todo equivocadas, ¿cómo puede explicarse este carácter esquizoide? ¿Por qué 30% de los mexicanos (comparado con 3% de los italianos y 7% de los alemanes) se muestra orgulloso de sus instituciones políticas,<sup>23</sup> mientras reniegan de los políticos, los funcionarios y, sobre todo, de la policía como de un puñado de ladrones?

Una explicación podría incluir una distinción sumamente clara entre la política nacional y la política local. Con esto no quiero decir una simple distinción entre el gobierno federal, por una parte, y el gobierno estatal o municipal, por la otra. Muchas de las dependencias federales operan en el ámbito local y así lo han hecho —de manera creciente— desde los años veinte y treinta.<sup>24</sup> Para lo que aquí pretendo, un funcionario local del Banco Ejidal, del INI o incluso del DDF es un actor de la política local, aun cuando pertenezca a una dependencia federal. La distinción depende más bien de la órbita de la acción política y separa —en los extremos— a los actores que se desempeñan en el escenario nacional, en la prensa, en la televisión, en el Congreso y en

---

<sup>19</sup> Almond y Verba, *op. cit.* pp. 49-50, 61, 66-67 y 77-78.

<sup>20</sup> De acuerdo con un estudio de Cornelius (1975, p. 56), 11% de los encuestados creía que se habían alcanzado las metas de la Revolución; 6% creía que habían sido olvidadas y 81% sostenía que “el gobierno seguía trabajando para alcanzarlas”.

<sup>21</sup> Stevens, *op. cit.*, p.32. Stevens da el ejemplo de un encuestado —un “miembro de una profesión liberal”—, cuya reacción al leer una historia en el periódico fue “¿por qué me cuentan hoy esta mentira?”, pero que sostenía la autonomía de los municipios mexicanos sobre la base de que “está escrita en la Constitución”.

<sup>22</sup> Joseph A. Kahl, *The Measurement of Modernism. A Study of Values in Brazil and Mexico*, Austin, University of Texas Press, 1974, pp. 114-116.

<sup>23</sup> Almond y Verba, *op. cit.*, p. 64.

<sup>24</sup> Alan Knight, “State, Power and Political Stability in Mexico”, en Neil Harvey (ed.), *Mexico Dilemmas of Transition*, Londres, Institute of Latin American Studies, 1993, p. 33.

ternos. En algunos casos —con Cárdenas y Echeverría, por ejemplo— han desafiado poderosos intereses creados, aunque no con mucho éxito.<sup>26</sup> Esta capacidad para la acción ejecutiva y el reformismo federal centralizado muestra que el Estado mexicano goza de cierta autonomía genuina (que no es un simple instrumento del capital nacional o internacional) y asegura que los ciudadanos, aun los “enajenados por la actuación del gobierno” de Almond y Verba, sigan teniendo —o, para ser cautelosos, podríamos decir “siguieran teniendo”— algo de fe en el sistema, en sus metas y en su capacidad de rescate. El “componente grande de expectativa” de la cultura cívica mexicana, que mencionan Almond y Verba, proviene, diría yo, del éxito del juego del *softball*, tal como lo percibe la multitud desde las gradas y, puesto que no se trata de una multitud de retrasados mentales, sus percepciones dependen fundamentalmente de la *acción* del gobierno tanto como de su *retórica*. En la terminología de la ciencia social, es probable que el apoyo “difuso” (que “implica una [...] orientación en general positiva y afectiva hacia el sistema político”) vaya perdiendo fuerza a menos que se complemente con “apoyo específico” (“apoyo proveniente de satisfacciones instrumentales o recompensas obtenidas del sistema político por ciudadanos individuales”).<sup>27</sup> Para ponerlo en términos más sencillos, el régimen no puede engañar a todos los mexicanos todo el tiempo, y los análisis que le dan mucha importancia a la ideología legitimizante de la Revolución —disociándola de la práctica política o considerándola incluso una especie de “conciencia falsa” que distrae a las masas de las condiciones objetivas— subestiman la perspicacia de la gente y sobreestiman el poder fáustico de la ideología.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> No sorprende, entonces, la infructuosa defensa que hizo Echeverría del “desarrollo compartido”, en general, o de la reforma fiscal, en particular. En cambio, Cárdenas *sí* logró una reforma sustancial. Sin embargo, yo diría que el alcance, el carácter y el resultado en el largo plazo de las reformas cardenistas se han exagerado un poco, en particular por quienes erróneamente describen el régimen cardenista como un poderoso mecanismo de un manejo social centralizado y radical. Alan Knight, “Cardenismo: Juggernaut or Jalopy”, *Journal of American Studies*, núm. 26, 1994, pp. 73-107.

<sup>27</sup> Cornelius, *op. cit.*, pp. 53 y 55. No pretendo abogar por un modelo del comportamiento político del actor racional estrecho, instrumentalista e individualista. Por lo contrario, gran parte de la historia mexicana moderna (por ejemplo, la Revolución, el cardenismo o los “nuevos” movimientos sociales) serían incomprensibles en estos términos y requerirían que se tuvieran totalmente en cuenta los sentimientos morales y las lealtades colectivas. Lo que quiero decir es que estos sentimientos y lealtades tienen una base objetiva —un *bottom line*, si se quiere— y que no puede forjarse y mantenerse simplemente sobre la base de ideologías, rituales, símbolos o socializaciones. El cardenismo, por ejemplo, recurrió a algunos apelativos emotivos —nacionalismo, agrarismo, “socialismo”—, pero éstos se arraigaron a causa de los logros concretos del cardenismo en la esfera de la reforma laboral y agraria.

<sup>28</sup> Cornelius, *ibidem*, p. 56. Cornelius nota la discrepancia entre los “modelos descriptivos

león).<sup>31</sup> Pero la retórica significa menos en el ámbito local, porque la gente del lugar conoce los resultados, y el abismo entre retórica y práctica se está ensanchando a ojos vistas. “Por sus hechos los conoceremos” y sus hechos están sujetos diariamente a la observación y al comentario. La política del *hardball* es violenta y corrupta y se considera en comparación con las normas oficiales de la Constitución mexicana que, por supuesto, se eluden cuidadosamente: éste es un mundo de elecciones arregladas, tribunales venales y ejidos “ficticios”.<sup>32</sup> Los caciques gobiernan poniendo en práctica una rama de la política maquiavélica en la que las camarillas, los feudos y la violencia desempeñan un papel fundamental.<sup>33</sup> Las venganzas se llevan a cabo con eficiencia despiadada, diezmado a las familias que participan; los pistoleros —que también pueden desempeñar el papel de abigeos— son reclutados de la generación joven rebelde; hoy día, como corresponde a una sociedad transnacional abierta, pueden incluso ser reclutados de entre las pandillas latinas de San Diego.<sup>34</sup> Las pistolas y los tiroteos son objeto de la mística machista, exaltados en historias y corridos, y no solamente en las remotas regiones rurales: “Dame la pistola, mamá / Voy a la universidad”, rezaba una canción de los cuarenta.<sup>35</sup> Los informes de los homicidios políticos —y sindicales— a menudo se explayan acerca del número, el calibre y el rendimiento del armamento utilizado.<sup>36</sup> En tierra caliente, por supuesto, el machete hace lo suyo. Éste es un mundo lleno de alias y apodos: *el Flaco, el Cara Cortada, el Chino, el Mapache, los Pintos, el Búho, el Tuerto, el Niño, el Negro, la Muerte, la Ballena, la Mano Negra, Cielito Lindo*.<sup>37</sup> Aquí predomina un vocabulario dife-

---

<sup>31</sup> Considérese, por ejemplo, el caso del gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, que “fue salinista ‘de hueso colorado’, luego colosista ‘de corazón’ y ahora zedillista ‘por convicción’” (*Proceso*, núm. 975, 10 de julio de 1995, p. 19).

<sup>32</sup> Schryer, *op. cit.*, caps. 7 y 11.

<sup>33</sup> Paul Friedrich, *The Princes of Naranja. An essay in Authoristorical Method*, Austin, University of Texas Press, 1986; Douglas Butterworth, *Tilantingo: comunidad mixteca en transición*, México, INI, 1990, pp.151-155; y James B. Greenberg, *Blood Ties, Life and Violence in Rural Mexico*, Tucson, University of Arizona Press, 1989.

<sup>34</sup> Schryer, *op. cit.*, pp. 124, 144 y 215; *Proceso*, núm. 871, 12 de julio de 1993, pp. 21-25.

<sup>35</sup> Schryer, *op. cit.*, p. 219; Mario Gill, *Pistoleroismo y otros reportajes*, Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa, 1985, p. 59. Para una referencia más contemporánea, veamos las palabras del ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa: “Son cuentos chinos eso de que a los niños... [debe dárseles] juegos fantasiosos... [en vez de] pistolas. Aquí, como en cualquier parte, los pequeños se entretienen con ellas. Por eso yo les doy pistolas y cañones” (*Proceso*, núm. 975, 10 de julio de 1995, p. 19).

<sup>36</sup> Alan Knight, “Habitus and Homicide: The Political Culture of Postrevolutionary Mexico”, ponencia presentada en la Conferencia sobre cultura política mexicana, Utrecht University, 28 al 29 de abril.

<sup>37</sup> Gill, *op. cit.*, p. 58.

mismo.<sup>43</sup> La polarización puede implicar, como he sugerido, clases o etnias, pero también puede implicar una rivalidad intercomunal que es endémica en la provincia mexicana. Si San José está enemistado con San Fernando y le disputa ya sea su emancipación o su supremacía política, no es de extrañar que, de acuerdo con la lógica predominante de “hostilidad fuera del grupo y solidaridad dentro de éste”,<sup>44</sup> don Fulano de Tal, cacique de San José, sea visto como un campeón popular por los josefinos y como un déspota amenazador por los fernandinos.

La política de partido en este ámbito local también tiene una coloración distinta. La disciplina partidaria —al menos entre 1952 y 1987—, fortalecida por la hegemonía nacional del PRI, es menos estricta en el ámbito local. Aquí, el PRI puede servir de vehículo para las facciones locales (ya sean populares o, más probablemente, elitistas),<sup>45</sup> pero las escisiones, los retiros de apoyo y los realineamientos son comunes y éstos, a su vez, proporcionan aperturas ocasionales para la oposición, sea para un partido de oposición reconocido (PAN, PPS, PRT) o para una oposición cívica amplia del tipo de la que se dio en Juchitán, Guerrero o en San Luis Potosí.<sup>46</sup> En la medida en que el PRI por lo común gana y en que esas elecciones son contiendas, si no arregladas, sin esperanza y de un solo bando, resulta palpable la falta de democracia local. Sin embargo, también resulta evidente la participación popular (y el interés popular en la política, que es bastante compatible con el cinismo popular).<sup>47</sup> En las comunidades rurales, inclusive en las comunidades indígenas gobernadas por una ética oficial de consenso, la pugna real puede anteceder a la propia elección y la opinión popular puede movilizarse —de manera no muy transparentemente democrática— para apoyar a candidatos en las elecciones intrapartidarias (un patrón sumamente evidente en los años treinta y cuarenta).

Por último, podemos notar que la violencia asociada con el *hardball* puede representar una pugna hobbesiana de todos contra todos, una violencia sin sentido para gratificar la *libido dominandi* del líder<sup>48</sup>

---

<sup>43</sup> Luis Roniger, “Caciquismo and Coronelismo: Contextual Dimensions of Patron Brokerage in Mexico and Brazil”, *Latin American Research Review*, vol. XXII, núm. 2, pp. 88 y 91.

<sup>44</sup> Cornelius, *op. cit.*, pp. 127-128.

<sup>45</sup> Boege, *op. cit.*, pp. 82-83.

<sup>46</sup> Carlos Martínez Assad, “Nava: de la rebelión de los coheteros al juicio político”, en Carlos Martínez Assad (ed.), *Municipios en conflicto*, México, IES-UNAM, 1985, pp. 55-74; y Víctor R. Martínez Vázquez y Anselmo Arellanes Mexueiro, “Negociación y conflicto en Oaxaca”, en Carlos Martínez Assad, *op. cit.*, pp. 203-238.

<sup>47</sup> Almond y Verba, *op. cit.*, p. 54.

<sup>48</sup> Friedrich, *op. cit.*, p. 134.

coronelismo brasileño.<sup>53</sup> Schryer compara a sus rancheros de la Huasteca con los “violentos empresarios campesinos” de Sicilia, estudiados por Anton Blok.<sup>54</sup> Sospecho que la comparación entre el PRI mexicano y el Partido del Congreso Nacional de la India durante su apogeo podría revelar una polarización similar entre la retórica florida y el *projectismo* del régimen nacional y la política baja, el soborno cotidiano y la represión popular de la localidad. Pero el Partido del Congreso se desmoronó, quizá precisamente porque no pudo sostener las contradicciones involucradas en esta articulación. México también ha enfrentado severas tensiones, pero hasta ahora el sistema político, caracterizado por la hegemonía nacional del PRI y por el presidencialismo, ha sobrevivido a pesar de las crisis recurrentes y las predicciones de su caída inminente.

## La articulación de los modos de la política

Para explicar esta extraordinaria longevidad, sería útil examinar más detenidamente la articulación de estos dos modos de la política, para ver cómo el *softball* y el *hardball* coexisten funcionalmente. El *hardball*, como ya sugerí, responde a distintas situaciones del conflicto local, pero implica patrones consecuentes de violencia, fraude, soborno, nepotismo y autoritarismo. Estos patrones son bastante compatibles con episodios de movilización popular, a menudo dirigidos contra los caciques locales (pero a veces también alentados por ellos); y estos últimos, como en el caso de los príncipes de Naranja de Friedrich, pueden asumir características tanto radicales como conservadoras.<sup>55</sup> Obviamente, en el contexto de un conflicto de clases intenso —por ejemplo, la Huasteca hidalguense en los años setenta—, la violencia suele incrementarse y los viejos pistoleros salen de su retiro o se reclutan nuevos. La violencia adquiere así una forma cíclica que puede representar, por ejemplo, tendencias económicas: el aumento del cultivo de café en Oaxaca, el tráfico de drogas en Sinaloa o la explotación forestal y la ganadería en Chiapas.<sup>56</sup> Además, la intrusión de los organismos federales puede tener

---

<sup>53</sup> Roniger, *op. cit.*, p. 84.

<sup>54</sup> Schryer, *op. cit.*, p. 143.

<sup>55</sup> Friedrich, *op. cit.*

<sup>56</sup> James B. Greenberg, *Santiago's Sword. Chatino Peasant Religion and Economics*, Berkeley, University of California Press, 1981, p. 196; Greenberg, *Blood Ties, op. cit.*, pp. xi, 193-194; *Proceso*, núm. 834, 26 de octubre de 1992, p. 31; y Neil Harvey, “Peasant Strategies and Corporatism in Chiapas”, en Joe Foweraker y Ann L. Craig (eds.), *Popular Movements and Political Change in Mexico*, Boulder, Lynne Rienner, pp. 186-195. El papel de los narcotraficantes en el



cultura democrática, a México, junto con gran parte del mundo, le falta mucho por andar.<sup>62</sup> Algunos podrían considerar cínica e interesada la tolerancia que muestra el Estado por el *hardball* local (y en un momento les proporcionaré algo que apoyará este argumento). Pero también vale la pena hacer notar que el gobierno deplora recurrentemente este estado de cosas y actúa contra él: emprende ofensivas intermitentes contra los caciques y los intereses creados; lucha, esporádica pero no del todo cínicamente, para beneficiar a las clases más pobres de la sociedad; representa, en algunas circunstancias, una fuerza para la conciliación social y, si la palabra no resulta demasiado fuerte, para la justicia social.

En ocasiones, tal acción responde a las clásicas reglas liberal-democráticas: como conceden incluso algunos críticos severos del PRI, se trata de una Iglesia extensa que no carece de sus “reformadores honestos”;<sup>63</sup> un buen ejemplo sería Carlos Madrazo.<sup>64</sup> Sin embargo, es más frecuente que las iniciativas del gobierno central involucren cierto poder discrecional, que se ejerce para calmar a la disidencia local y para repartir beneficios sociales. En consecuencia, los principales esfuerzos redistributivos desde la Revolución han salido del gobierno federal y han sido emprendidos a pesar de la estruendosa resistencia de las élites locales. Como resultado, los movimientos populares —sean éstos los agraristas de los años treinta, los paracaídas urbanos de los setenta o los “nuevos movimientos sociales” de los ochenta— se han percatado de que el gobierno federal puede ser un útil aliado cuando se trata de confrontar a las élites locales intransigentes.<sup>65</sup> El gobierno federal también ha sido cuna de cuadros de reformadores: de los maestros rurales de la década de los años treinta a los delegados de Pronasol de principios de los noventa. En México —como en Estados Unidos en la década de los años sesenta— el Estado federal puede servir como un contrapeso progresivo para los intereses locales conservadores, y los aspirantes a reformadores suelen alistarse en las filas de la burocracia federal a falta de otra alternativa práctica. Así, encontramos a personas como Arturo Warman y Gustavo Gordillo ocupando altos puestos en el gobierno de Salinas y a ex maoístas formando parte del personal

---

<sup>62</sup> Almond y Verba, *op. cit.*, p.7.

<sup>63</sup> Kenneth F. Johnson, *Mexican Democracy: A Critical View*, Nueva York, Praeger, 1978, p. 183.

<sup>64</sup> Rogelio Hernández Rodríguez, *La formación del político mexicano. El caso de Carlos A. Madrazo*, México, El Colegio de México, 1991.

<sup>65</sup> Cornelius, *op. cit.*, p. 38, y Harvey, *op. cit.*, pp. 199-189.

tualmente en Chalco.<sup>69</sup> Por consiguiente, el *softball* tiene sus perfiles regionales: poder discrecional y redistribución populista en el Distrito Federal (o Michoacán) y pluralismo político —manifestado en las victorias electorales panistas— en los estados fronterizos.

Aunque estos factores ayudan a explicar la preferencia nacional por el *softball*, por la retórica magnánima y —más importante si esta última ha de ser eficaz— por los esfuerzos recurrentes para reformas genuinas, también debe reconocerse que el *hardball* local se tolera, no se erradica con firmeza y, en ocasiones, tácitamente se fomenta. En primer lugar, la mayoría de los observadores de la política mexicana reconocen que en algunas situaciones el gobierno federal no tiene (o tiene muy pocos) escrúpulos para participar él mismo en el *hardball*: Tlatelolco es el ejemplo clásico. Circulan historias de intimidación individual e incluso de asesinatos (y no me refiero simplemente a las aventuras del profesor Kent Cornett). A un gobierno federal, cuyo personal está formado por tecnócratas educados que poseen doctorados de universidades estadounidenses, le gustaría gobernar a México como si se tratara de Suecia o de Suiza. En este sentido, resulta comprensible la impaciencia tecnocrática hacia la política dinosauria. Pero México no es Suecia ni Suiza, por lo tanto, las desviaciones seleccionadas de la práctica democrática transparente ocurrirán, sin duda, con la connivencia oficial. Sin embargo, la ventaja del síndrome dual del *hardball/softball* es que la responsabilidad puede, hasta cierto punto, ser evadida. La pistola humeante puede encontrarse en las callosas manos del cacique, no en las de los graduados de las universidades “Ivy League” de Estados Unidos. Si se da una situación de tensión local, el ejecutivo central puede elegir intervenir o no; intervenir en favor de un lado o del otro, evaluando el equilibrio local de fuerzas y los beneficios que podría acumular. De esta manera, mantiene un grado de incertidumbre que aumenta la autoridad federal. Como observa Schryer (p. 221):

además del hecho de que el gobierno federal no tiene los recursos para realizar las investigaciones en todos esos asesinatos [de líderes campesinos], se podría alegar que el fracaso para establecer con claridad quién es el responsable contribuye a cierto grado de estabilidad política, dejando que todos se sigan haciendo conjeturas y permitiendo que los

---

<sup>69</sup> Cornelius, *op. cit.*, p. 71.

cochado. Desde la perspectiva de este análisis, el sistema sirve a la presidencia de dos maneras diferentes. Primero, la presidencia se convierte en la fuente del patrocinio y de los beneficios; a los suplicantes se les enseña a mirar hacia Los Pinos; en consecuencia, los archivos presidenciales están repletos de cartas y telegramas de peticiones, la mayoría de las cuales exhortan al funcionario a mantenerse fiel al “discurso oficial” de la Revolución. La presidencia adquiere en consecuencia un aura paternalista. Segundo, la crítica se desvía del presidente y, por lo general, del gobierno federal hacia los gobernadores de los estados, los presidentes municipales y los caciques locales: los profesionales del *hardball*.<sup>72</sup> Se busca la intervención presidencial para condenar los bastardos intereses que pervierten localmente los intereses de la Revolución. Es una versión mexicana del buen zar, al que acudían los campesinos rusos, alegando las fechorías de los *boyars* (señores) y de los malos consejeros. James Scott afirma que tales peticiones demuestran que el llamado “monarquismo ingenuo” no es en realidad ingenuo sino intentos bien calculados para manipular la ideología proclamada —el “discurso oficial”— del régimen.<sup>73</sup> Bien sean ingenuas, bien sean calculadas o un poco de ambas, estas peticiones, en el caso de México, señalan claramente la creencia de que el ejecutivo central puede y debe intervenir; que puede reparar los abusos de los intereses creados locales y que se adhiere a una vaga pero resonante filosofía de nacionalismo y justicia social. Por consiguiente, como ya dije, los compromisos recurrentes del gobierno federal para la reforma y el patrocinio (más recientemente en la forma de Pronasol), dan cierta legitimidad a su filosofía poniéndola por encima de la palabrería hueca, y esto, a su vez, crea percepciones y expectativas de que los intereses locales actúan como si se trabaran y se esquivaran en la arena del *hardball*. Przeworski atribuye la caída del comunismo en parte al prolongado abismo que se abrió entre la retórica y la práctica: “la gente necesita una pequeña cantidad de coherencia cognoscitiva; cuando sus pensamientos y sus palabras perpetuamente divergen, la vida se vuel-

---

<sup>72</sup> Los archivos de las décadas de los años treinta y cuarenta están repletos de peticiones al presidente que denuncian a tiranos locales y estatales, pero exoneran al primer mandatario, o que solicitan tropas federales para contrarrestar a los caciques tiranos y a los paramilitares. Por ejemplo: Pedro Vela Rodríguez, acta levantada, Atlixco, 23 de septiembre de 1938, Departamento Autónomo de Trabajo (AGN), caja 251, expediente 3; Manuel Pineda, delegación del PRUN, Estado de México, a Cárdenas, 20 de junio de 1940, Dirección General de Gobierno (AGN), caja 99, 2.311.P(12)18131. Futuros historiadores encontrarán, sospecho, que una retórica similar se sigue utilizando en la actualidad.

<sup>73</sup> Scott, *op. cit.*

mente se suponen, el avance puede ser largo y convulsionado y los efectos pueden tardarse en llegar. La cultura política, como dije al principio, no cambia de la noche a la mañana. Aun si —un gran “si”— la política local del *hardball* se retrae, aun si —un “si” todavía más grande— la política nacional se juega cada vez más de acuerdo con las decorosas reglas del *softball*, llevará mucho tiempo eliminar al primero, tan profundamente arraigado en la vida de México.

### ***Post scriptum***

Como mencioné al principio, decidí no volver a escribir este artículo a la luz de los acontecimientos de 1994-1995 sino agregar este breve *post scriptum*. ¿Cómo confirman o contradicen mis argumentos estos acontecimientos, en particular la rebelión zapatista y los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu?<sup>77</sup>

En lo que se refiere al primero, el levantamiento del EZLN reveló de manera dramática lo que los chiapanólogos ya sabían desde hace tiempo: que las formas de opresión étnica y de clases permanecieron omnipresentes en el lejano sur, que prevaleció una forma particularmente egregia del caciquismo, y que la capacidad mediadora del PRI había sido seriamente lesionada, sobre todo desde la década de los setenta.<sup>78</sup> Chiapas era la región del *hardball* por excelencia. Así, una historia de 20 años de movilización y represión —análoga en muchos aspectos a la movilización y represión de la Huasteca, descrita por Schryer y ya antes mencionada— culminó finalmente en una insurrección a gran escala. Sólo la dimensión y el efecto de la rebelión fueron inusuales. Por lo menos en Chiapas —y en particular en ciertas regiones de Chiapas—<sup>79</sup> la capacidad mediadora y reformista del PRI se consideró

---

<sup>77</sup> Por supuesto, un análisis completo incluiría el asesinato de Polo Uscanga y otros asesinatos políticos; las reverberaciones del zapatismo, incluida la creciente violencia en Guerrero, el papel de los militares, de los judiciales, del liderazgo del PRI y de las mafias de la droga.

<sup>78</sup> Antonio García de León, *Resistencia y utopía*, México, Era, 1985, vol. II; y Harvey, *op. cit.*

<sup>79</sup> Ha habido cierta tendencia en algunas fuentes a homogeneizar a Chiapas. La opinión de expertos hacía énfasis en las variaciones regionales y locales dentro de lo que es una entidad grande y compleja. La rebelión zapatista, en particular, parece haber tenido mayor éxito en la selva lacandona y sus alrededores, no sólo porque se trata de una región remota, afectada por graves conflictos sociales, sino también porque se trata de una región donde el sistema priísta del control social y la mediación nunca han funcionado con mucha eficiencia. Nuevamente sospecho que los futuros historiadores de la rebelión —al igual que los historiadores recientes de la rebelión cristera— concentrarán su atención en los patrones *locales* de producción, política y protesta.

alto nivel al parecer vinculada con narcotraficantes, obviamente tiene mucha mayor importancia; en realidad, el mero hecho de que muchos mexicanos se hayan formado su propia opinión es en sí importante, y esta importancia se incrementa con las muertes de Ruiz Massieu y de Polo Uscanga, ya que, en general, la élite gobernante mexicana se protege a sí misma. La violencia ataca a los plebeyos, no a los patricios: “los soldados mueren y los generales viven”, como dice *Scarface*, el cacique de Naranja.<sup>80</sup> Esto no fue siempre así (considérese el holocausto de la élite de 1910-1929), pero se fue haciendo cada vez más cierto desde los años treinta, cuando la purga pacífica de Calles y los callistas, realizada por Cárdenas, proporcionó el punto de cambio. Desde entonces, los desafíos presidenciales fallidos han sido comprados, no aniquilados. El ejército ha permanecido en las barracas y no ha habido suicidios de altos políticos (compárese con Busch, Chibás, Vargas, tal vez Allende). El único intento de asesinato presidencial fue, hasta donde sabemos, obra de un fanático solitario.<sup>81</sup> De esta manera, la élite política mexicana ha mantenido una fachada razonablemente decorosa y, como he dicho, la violencia abierta ha sido relegada al bajo mundo de la política popular y provinciana. Esto no es sólo para guardar las apariencias, también tranquiliza a las facciones rivales y mantiene el conflicto político dentro de los límites. Los perdedores podían perder poder, patrocinio, quizá propiedades, a veces la libertad, pero nunca su vida. Si no sirvió para otra cosa, tal sistema político ayudó a preservar la cohesión de las élites y evitó la confrontación extrema: los perdedores vivían para tirar otro dado, podían tragarse su orgullo, perder (a veces) sus ganancias mal habidas y esperar pacientemente la próxima vuelta de la rueda política.<sup>82</sup> Si, como ahora sugieren algunos, las facciones dentro de la élite predominante han quebrantado las viejas reglas del juego, rompiendo un pacto que ha durado casi sesenta años y recurriendo a sanciones extremas para recompensar a sus amigos y castigar a sus enemigos, introduciendo así —o reintroduciendo— las reglas del *hardball* en la política mexicana de élites, entonces no sólo sufrirán el prestigio y la legitimidad externas del régimen sino

---

<sup>80</sup> Friedrich, *op. cit.*, p. 11. El comentario de Friedrich a propósito de Naranja: “comparativamente pocos de los líderes y combatientes prominentes han muerto con las botas puestas, el golpe lo reciben los inferiores”, podría servir como texto general para la política mexicana desde la década de los treinta.

<sup>81</sup> Me refiero al atentado en contra del presidente Manuel Ávila Camacho perpetrado por el teniente José Antonio de la Lama Rojas el 11 de abril de 1944.

<sup>82</sup> *Proceso*, núm. 894, 20 de diciembre de 1993, pp. 6-10.

## Cultura y democracia

Como cualquier otro ejercicio intelectual, el análisis de la democracia y de la democratización ha pasado por fases visibles, el resultado del cambio de la moda intelectual, el desarrollo de los acontecimientos mundiales y la dialéctica interna del debate. En los años setenta, los fracasos de la democracia y el autoritarismo burocrático se apropiaron de los encabezados; en los ochenta, las transiciones hacia la democracia (incluida una supuesta transición mexicana) saltaron a primera plana; ahora, los autores discuten —uno espera que con un adecuado sentido de la *hubris*— la consolidación de la democracia. En la medida —supuestamente considerable— en que este cambio de interés refleje el cambio de circunstancias, México se ubica de manera incómoda junto a la mayoría de los países de América Latina. Su transición fue bastante dudosa, ya que no queda muy claro qué es lo que hay que consolidar más allá de un puñado de gobiernos panistas locales y estatales y un congreso federal más diversificado. México es también un caso único en otro aspecto. En los años sesenta, los investigadores se inclinaban aparentemente por las explicaciones macrosociales de la democracia: explicaciones de cultura política basadas ya sea en una amplia comparación global<sup>3</sup> o en una evolución histórica de largo plazo. Estas explicaciones se orientaban hacia el determinismo: si la democracia se insertaba dentro de una cultura cívica o si era moldeada por generaciones de conflictos de clase, no era probable que llegara y se fuera de acuerdo con circunstancias coyunturales. Una guerra mundial podría aplastar el autoritarismo germano, acabando con el legado de la “revolución desde arriba” de Prusia, pero esos acontecimientos memorables fueron raros y la suposición era que los rasgos de la democracia —y sus opuestos autoritarios— se imprimían profundamente y no era fácil alterarlos.

Sin embargo, su enfoque no podía aplicarse tranquilamente a América Latina, donde las transiciones del autoritarismo a la democracia y viceversa eran bastante comunes, al punto de que hubo quienes aventuraron la idea de que la norma era el cambio sistémico y no la durabilidad estructural. Más recientemente, con la plétora de estudios sobre la transición y la consolidación, el énfasis se puso en los sucesos coyunturales, en el proceso de toma de decisiones por parte

---

<sup>3</sup> Gabriel A. Almond y Sidney Verba, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, Boston, Little, Brown, 1965.

en política mexicana no necesariamente desenfundan su revólver cuando escuchan la palabra cultura. Roderic Ai Camp dedica un capítulo de su libro reciente a la cultura política.<sup>10</sup> No hace mucho, Joe Foweraker —que no es partidario del positivismo ni del pluralismo— ha retomado a Almond y Verba.<sup>11</sup> Victoria Rodríguez y Peter Ward, en su estudio sobre los gobiernos de oposición, se refieren a las “actitudes y sistemas políticos profundamente arraigados” construidos a lo largo de 50 años de hegemonía priísta y hacen notar que el Partido Acción Nacional, enfrentado a la tarea de gobernar localmente, “se dedica a fomentar el surgimiento de una cultura cívica en lugar de una cultura politizada y partidaria”.<sup>12</sup> En otras palabras, la “cultura política” sigue siendo uno de los pilares de la política mexicana y un elemento esencial en cualquier análisis cuidadoso. De hecho, me imagino que los analistas de México podrían invocar la cultura política de una manera más rápida y convincente que los de, por ejemplo, Argentina o Venezuela, y me pregunto en qué medida puede reconciliarse el énfasis en la cultura —con sus connotaciones de patrones de percepción y conducta de evolución lenta y ponderada— con una transformación estructural seria. Si, por ejemplo, el éxito del PAN requiriera la construcción de una nueva cultura cívica, yo no apostaría mucho al éxito del Partido Acción Nacional.

Antes de seguir con el argumento, hay que hacer una breve aclaración. La noción de una cultura cívica o política distintiva no implica ni su homogeneidad ni su inmutabilidad. Aunque —como alegaré— México tenga una cultura política nacional que es compartida hasta cierto punto por todas las clases y regiones,<sup>13</sup> esta cultura evidentemente no es del todo uniforme; existen diferencias no sólo entre regiones (norte, centro, sur) sino también dentro de las regiones (Yucatán es distinto de Chiapas, Sonora de Nuevo León) e incluso hay diferencias

---

*Concept of Political Culture*, Oxford, Oxford University Press, 1992, puede leerse una exposición y defensa recientes de esta idea (en el contexto soviético).

<sup>10</sup> Roderic A. Camp, *Politics in Mexico*, Nueva York, Oxford University Press, 1993.

<sup>11</sup> Joe Foweraker, “Popular Movements and Political Culture in Contemporary Mexico” ponencia presentada en la Conferencia sobre Cultura Política Mexicana, Utrecht University, 28 al 29 de abril de 1994.

<sup>12</sup> Victoria E. Rodríguez y Peter M. Ward, *Policymaking, Politics and Urban Governance in Chihuahua*, Austin, University of Texas, LBJ School of Public Affairs, 1992, pp. 54-59.

<sup>13</sup> El hecho de compartir una política nacional no implica, por supuesto, homogeneidad cultural: simplemente refleja la pertenencia común a un Estado nacional en una forma particular bien arraigada de regla política, una forma que tiene sus propias peculiaridades y que es claramente distinta de, por ejemplo, la de los estados vecinos. Como consecuencia, la política de Tijuana y la de Tapachula tienen elementos en común que a su vez son distintos de, digamos, San Diego o Quetzaltenango.

tes proyectos, pero su *modus operandi*, su manera de obtener las cosas, de llevar a cabo sus proyectos, de gobernar a una sociedad cuya gobernabilidad ha sido debatida, suele mostrar marcadas congruencias. No obstante, estas congruencias no tienen nada que ver con el carácter nacional, “lo mexicano”, la psique mexicana, la herencia azteca o cualquier otro término. Si estos vagos conceptos significan algo —y con frecuencia no lo hacen—, simplemente reflejan condiciones sociales y prácticas políticas. En otras palabras, por “cultura política” quiero decir la manera en que los mexicanos históricamente hacen política. Esto puede reducirse a un conjunto de postulados “psicológicos” que, a su vez, pueden calibrarse sobre la base de cuestionarios, pero esto último podría ser obviamente engañoso.<sup>18</sup> En lugar de las actitudes supuestamente deducidas a partir de los cuestionarios, preferiría deducir pautas de comportamiento y percepción con base en la práctica política, de la historia. Estas pautas rara vez pueden ser calibradas, ya que el análisis resultante sería “impresionista” e incluso “anecdótico”. No puedo decir con precisión cuán extendidas están estas pautas ni con qué rapidez declinan (ni si en verdad lo hacen). Mi principal afirmación es que son antiguas, duraderas y que están lejos de caducar.

### ¿Una política esquizoide?

Almond y Verba sugirieron que México tenía una cultura política algo esquizoide, en la que los ciudadanos sentían cierto orgullo del gobierno, depositaban su fe en las “metas de la Revolución” e incluso creían que el gobierno (nacional) estaba poniendo en marcha progresivamente esas metas; pero en la que los políticos, los funcionarios y, sobre todo, la policía eran poco estimados y en la que el soborno, el nepotismo y el clientelismo habían proliferado. En consecuencia, en la jerga de los estudios, la cultura política mexicana incluía un “componente grande de expectativa” (*large aspirational content*) unido a la “continua identificación simbólica con la Revolución mexicana”. No obstante, había también una “gran incidencia de súbditos enajenados y particularistas” (*alienated subjects and parochials*), sobre todo “enajenados por la actuación del gobierno” (*output alienates*) que creían que éste “era indiferente a los intereses de los pobres o que era corrupto y sensible sólo

---

<sup>18</sup> Evelyn P. Stevens, *Protest and Response in Mexico*, Cambridge, MIT Press, 1974, pp. 28-29.



las secretarías de los que operan en la política cara a cara de la ciudad, barrio o población. Algunos actores, por supuesto, pueden desempeñarse en ambas órbitas. Hasta ahora, he mezclado mis metáforas, refiriéndome a actores, órbitas y etapas. Se podría optar por una terminología más neutral y abstracta, tomándola prestada, quizá, del marxismo estructural de los sesenta y los setenta y que se refiera a una articulación de modos, no de producción sino de política, con un modo “nacional” que se articula con un modo “local”. O se podría optar —como hice en el título— por una terminología específicamente mexicana que contraste el “México bronco” con el “México manso”, tal como los observadores porfiristas diferenciaron entre los yaquis rebeldes —brancos— de la sierra y los yaquis establecidos —mansos— de las haciendas del sur de Sonora.<sup>25</sup>

Sin embargo, puesto que la discusión que sigue es en gran medida sobre reglas —escritas y no escritas— y sobre técnica, he optado por una buena metáfora antigua y deportiva que proviene del beisbol. Según esta metáfora, la política nacional mexicana es un tipo de *softball*, esa variedad de beisbol relajado que se juega con una pelota grande entre amigos y familiares, y sin afán de competencia en los parques públicos de Estados Unidos. La política del “*softball*” se juega con un espíritu de camaradería cooperativa. La nación es una familia, el presidente es el padre de familia. La retórica oficial, que es incesante y entorpecedora, resulta tranquilizadora, patriótica y populista (aun cuando surja de presidentes supuestamente no populistas). Se exaltan las tradiciones y los héroes mexicanos, así como sus logros. Aun cuando en época reciente la Revolución ha figurado de manera menos prominente en la retórica oficial, no ha habido un repudio oficial ni explícito. Se invoca a Zapata intensamente; se valora a los indígenas y a la cultura indígena. El tono es magnánimo, progresivo y reformista. Incluso los presidentes “conservadores” son reformadores. La premisa del juego del *softball* es que todos son ganadores y que el gobierno está trabajando para el bien común. Esto, como iremos viendo, se quedaría en una retórica vacía, en una palabrería engañosa, si no fuera por el hecho de que los gobiernos nacionales ponen a veces su dinero donde está la boca. Han repartido beneficios —tierras, educación, empleos públicos, programas contra la pobreza— y han mantenido un grado de cohesión nacional e independencia frente a los desafíos tanto internos como ex-

---

<sup>25</sup> Moisés González Navarro, *Historia moderna de México. El Porfiriato, la vida social*, México, Hermes, 1970, pp. 249-259.

Comparemos esto con el juego local del *hardball*. Aquí entramos en un mundo distinto en el que se habla un lenguaje diferente. Aquí encontramos caciquismo, clientelismo, soborno, nepotismo y violencia.<sup>29</sup> Todas estas características tan desagradables, podrían decir ustedes, existen también en el ámbito nacional; yo diría, sin embargo, que sus manifestaciones nacionales son disimuladas, encubiertas y negadas. Localmente, caen los guantes y las máscaras. Por supuesto, la retórica sigue desempeñando su papel. Generaciones de caciques rurales han sido portavoces de los lemas oficiales más recientes; los que fueran agraristas en la época del general Lázaro Cárdenas se convirtieron en guerreros fríos en la del presidente Miguel Alemán.<sup>30</sup> Estos camaleones políticos continúan existiendo (de hecho, se podría decir que los recientes acontecimientos de la política nacional mexicana han favorecido, como la selección natural, las cualidades del cama-

---

y normativos del sistema” de los mexicanos; compara, correctamente en mi opinión, “un modelo descriptivo de su sistema político [de los mexicanos] que es sumamente congruente con la realidad”, y que por consiguiente tiende al cinismo, y una identificación normativa positiva con las extensas metas del gobierno. La tensión resultante es mitigada, según este análisis, por el “ritual político y la socialización política dirigida a través de las escuelas, los medios de comunicación de masas y las organizaciones voluntarias controladas por el gobierno”. Aunque sin duda hay algo de cierto en esto, me siento escéptico acerca de la capacidad de, por ejemplo, el ritual político o los medios de comunicación de masas para llenar este vacío de credibilidad. Tal suposición, me parece, sobreestima la credulidad de la gente y subestima la capacidad del régimen para inducir la obediencia, esencialmente por medios concretos, redistribucionistas, clientelistas y no ritualistas. En este sentido, mi análisis se debe en gran medida a Scott (James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts*, New Haven, Yale University Press, 1990), que descarta las imputaciones demasiado fáciles de “hegemonía” y “falsa conciencia”. Sin embargo, a diferencia de Scott, yo no desecharía por completo estos conceptos explicativos: lo que Scott (*op. cit.*, p. 72) llama la “versión débil de la falsa conciencia” —esto es, la que postula que los grupos subordinados no apoyan positivamente el *status quo* sino que lo aceptan resignadamente sobre la base de que “no hay alternativa” — en mi opinión puede adaptarse muy provechosamente al régimen del PRI.

<sup>29</sup> Se ha señalado correctamente que la política local también puede ser una fuente de valores, prácticas y ejemplos democráticos que se oponen al Estado central autoritario: por ejemplo, con movimientos sociales populares o partidos políticos de oposición y protestas cívicas (a saber, el PAN, el navismo). En respuesta, yo alegaría: 1) que tales esfuerzos locales dependen en parte de la tradición de reforma (*softball*) del gobierno central, que ofrece una variedad de oportunidades. Si el gobierno central, siguiendo el estilo (*hardball*) de los caciques, sólo reprimiera, los disidentes podrían o esconderse o tomar las armas (hablando crudamente, estaríamos en una situación “centroamericana”), y 2) que, como digo en este artículo, los movimientos democráticos/populares se arriesgan a asumir las características de sus enemigos (por ejemplo, una vez que triunfan, empiezan a parecer menos democráticos/populares y son sutilmente cooptados por la cultura política predominante; está por verse, por ejemplo, si los gobiernos locales y municipales panistas siguen este camino trillado o se lanzan valientemente en pos de una nueva política transparente y democrática).

<sup>30</sup> Raymond Buve, “State Governors and Peasant Mobilization in Tlaxcala”, en D.A. Brading (ed.), *Caudillo and Peasant in the Mexican Revolution*, Cambridge, Cambridge University Press, 1980, pp. 222-224; Frans J. Schryer, *Ethnicity and Class Conflict in Rural Mexico*, Princeton, Princeton University Press, 1990; y Knight, “Cardenismo...” *op. cit.*

rente comparado con la retórica tranquilizadora del *softball*: es un mundo de atropellos, atentados, zafarranchos, chanchullos, pistoleros, puñaladas, polizontes, caciques, caciquillos, lidercillos, esbirros, buscachambas, paracaidistas, aviadores, mozos de confianza, “malditos indios” y terratenientes que admiran a Somoza.<sup>38</sup> Como sugiere la última referencia, se trata también de un mundo donde el indigenismo oficial se enfrenta a un racismo arraigado, donde —en el caso de Schryer— las impresiones que tienen los forasteros de la Huasteca (una Arcadia indígena de guirnaldas florales y blusas bordadas de vivos colores) “contradecían la corriente subyacente de conflicto y represión política que todavía formaba parte de la vida diaria en la Huasteca de Hidalgo”.<sup>39</sup> Los conflictos locales no siguen necesariamente líneas étnicas, pero a pesar del indigenismo oficial siguen siendo comunes las suposiciones de la inferioridad, la brutalidad y la amenaza de los indios.<sup>40</sup>

El *hardball* local implica represión —incluidas las “desapariciones”— y elecciones arregladas; pero esto no significa que la política no tenga sentido, que sea “puramente” de facciones o que esté simplemente controlada por élites. Pueden reconocerse distintos patrones. En algunas áreas, los caciques locales gobiernan, a instancias de las élites, sofocando a la oposición. Por otra parte, algunos caciques muestran un populismo genuino: premian a sus amigos al igual que castigan a sus enemigos, forman comitivas populares, reparten tierras, empleos y obras públicas. Algunos caciques han sido, por supuesto, genuinos izquierdistas en cuanto que apoyaron a Cárdenas con lealtad —y no sólo con oportunismo— en los años treinta.<sup>41</sup> Los jefes de la ciudad y los caciques sindicales (*La Quina* es el ejemplo obvio más reciente) gozaron de verdadero apoyo en sus feudos locales.<sup>42</sup> Por lo tanto, frecuentemente la imagen del cacique —como la del bandido social— tiene dos caras: él (y creo que casi siempre son hombres) es reverenciado por sus partidarios (como un luchador, un amigo del pueblo) y condenado por sus críticos como un despreciable tirano que se sirve a sí

<sup>38</sup> Schryer, *op. cit.*, p. 157; Knight, *Habitus and...*, *op. cit.*; y Eckart Boege, *Los mazatecos ante la nación. Contradicciones en la identidad étnica en el México actual*, México, Siglo XXI, 1988.

<sup>39</sup> Schryer, *op. cit.*, p. 140.

<sup>40</sup> Schryer, *op. cit.*, p. 157, y Alan Knight, “Racism, Revolution and Indigenismo: México, 1910-1940” en Richard Graham (ed.), *The Idea of Race in Latin America, 1870-1940*, Austin, University of Texas Press, pp. 71-114.

<sup>41</sup> Friedrich, *op. cit.* y Schryer, *op. cit.*, cap. 8.

<sup>42</sup> Cornelius, *op. cit.*, pp. 69, 137, 139 y 141.

pero también puede reflejar una genuina; lucha de clases (o a veces étnica) como sucedió durante el periodo revolucionario o, más recientemente, en Sonora en los años setenta, en la Huasteca en los ochenta o en Chiapas en los noventa. No obstante, bien que los caciques sean conservadores o populistas, bien que la violencia obedezca a un motivo ulterior (de clase o étnico), las modalidades de la política local —las reglas del *hardball*— tienden a perdurar, contribuyendo a crear una ciudadanía enajenada y cínica que, atinadamente, percibe un abismo entre retórica y práctica y no escatima sus críticas a la conducta política local. Sin embargo, yo señalaría que los especialistas en ciencias políticas han puesto poca atención a esto, que es el lado oscuro de la política mexicana. Por supuesto, existen muchísimas críticas a las fallas democráticas de México, a las maquinaciones de la *Cosa Nostra* o a la “relación simbiótica [que] se ha creado entre las élites políticas nacionales y los caciques locales que aún subsisten”,<sup>49</sup> y también existen valiosos estudios sobre la política urbana baja y el caciquismo que ilustran que el *hardball* no es un fenómeno exclusivamente rural.<sup>50</sup> Pero la metodología de la ciencia política —en comparación con la antropología— no se presta para sacar al sol los trapos sucios locales<sup>51</sup> ni para hacer de ése un proceso fácil y seguro. Como respondió un latifundista oaxaqueño cuando unos investigadores le pidieron que explicara por qué algunos lugareños habían sido asesinados: “por andar de preguntones, como ustedes”.<sup>52</sup>

Este patrón dual seguramente no es exclusivo de México. Roniger encuentra “estrechas similitudes” entre el caciquismo mexicano y el

---

<sup>49</sup> Susan Kaufman Purcell, “Mexico: Clientelism, Corporatism and Political Stability”, en S.N. Eisenstadt y René Lemarchand (eds.), *Political Clientelism, Patronage and Development*, Beverly Hills, Sage Publications, 1981, p.211.

<sup>50</sup> Cornelius, *op. cit.*, y Susan Eckstein, *The Poverty of Revolution. The State and the Urban Poor in Mexico*, Princeton, Princeton University Press, 1988.

<sup>51</sup> Viviane Brachet-Márquez, “Explaining Sociopolitical Change in Latin America: The Case of Mexico”, *Latin American Research Review*, vol. 27, núm. 3, p. 107. Brachet-Márquez hace una referencia similar a “el lado oscuro del régimen político de México, el cual es implícitamente reconocido por todos pero poco examinado en las discusiones recientes sobre el cambio político”. Esta falta de interés proviene, creo yo, de diversas causas: una preocupación por la macropolítica, que rehuye las minucias locales; un énfasis bastante optimista en la estabilidad y legitimidad del régimen, que fue característico de los análisis durante los años cincuenta y sesenta; y, en consecuencia, un viraje hacia estudios ya sea sobre transición democrática o sobre “nuevos movimientos sociales”, estudios que, aunque a menudo criticaban fuertemente al régimen, también eran optimistas acerca de las perspectivas de la representación popular, la disolución corporativista y la democratización genuina. Se puede alegar que todos estos enfoques subestimaron el lado menos agradable, clientelista y defensor del sistema de la política mexicana.

<sup>52</sup> Boege, *op. cit.*, p. 14.

resultados muy disímiles. En algunos casos, los organismos federales pueden desafiar los intereses creados locales y alinearse con los insurgentes (que son en potencia los caciques de mañana); alternatively, pueden ser colonizados por los intereses creados locales y utilizados para apuntalar el *statu quo*.<sup>57</sup> En otros casos —por ejemplo, el compromiso de Cárdenas para la educación socialista o el de De la Madrid para que hubiera elecciones libres— la resistencia local frena con éxito el embate de la reforma federal. La centralización no es, por consiguiente, el toque de muerte del caciquismo (o del coronelismo, dice Roniger).<sup>58</sup> El juego local —jugado de acuerdo con las reglas del *hardball*— sigue su marcha a pesar del aumento del poder del gobierno central.

Esto plantea la cuestión de los motivos federales, de la razón principal del gobierno central. ¿Por qué permite que continúe el *hardball*? ¿Por qué no vacía los establos de Augías de la política local? Hay varias respuestas. Primero, ha habido recurrentes estallidos de reforma: intentos —no siempre sostenidos— para garantizar elecciones justas, campañas de despistolización, remoción de egregios caciques de los estados, municipios y sindicatos. A través del tiempo, el nivel global de violencia ha disminuido sin duda, al menos comparado con el sanguinario periodo de los años veinte y treinta,<sup>59</sup> pero hay excepciones a esta tendencia<sup>60</sup> y, considerando un marco temporal menos extenso, está lejos de ser evidente que México sea políticamente más pacífico en la actualidad que hace diez o veinte años. Según fuentes del PRD, 231 activistas de ese partido fueron víctimas de asesinato político en los cinco años posteriores a las elecciones de 1988.<sup>61</sup> Por lo tanto, la violencia continúa siendo una realidad de la vida política, y los conflictos locales —entre clases, comunidades, facciones, partidos o sindicatos— por lo regular engendran violencia, incluso después de periodos de engañosa tranquilidad. Si, como suponían Almond y Verba, un “apaciguamiento humano y razonado de la violencia” era un sello distintivo o una condición previa de la

---

aumento de la violencia política y su contribución al síndrome del *hardball* es obviamente fundamental. Si, por falta tanto de espacio como de conocimiento, evito en este artículo cualquier análisis específico al respecto, no debe considerarse que ello implica que subestimo su importancia.

<sup>57</sup> Knight, *State Power*, *op. cit.*, p. 40.

<sup>58</sup> Roniger, *op. cit.*, pp. 85-86.

<sup>59</sup> Lola Romanicci-Ross, *Conflict, Violence and Morality in a Mexican Village*, Palo Alto, National Press Books, 1973, pp. 132-133.

<sup>60</sup> Greenberg, *Santiago's Sword*, *op. cit.*, p. 196; y *Blood Ties*, *op. cit.*, pp.xi-xii.

<sup>61</sup> *La Jornada*, 3 de septiembre de 1993, p. 38; véase también Proceso, núm. 908, 28 de marzo de 1994, pp. 29-31.

de Solidaridad en Durango (incluso, a algunos les gustaría hacernos creer, viviendo en Los Pinos).

Pero ¿por qué habría de mostrar el gobierno federal esta predilección por la reforma, por lo menos en comparación con sus contrapartes estatales y locales? El gobierno federal históricamente ha monopolizado los recursos; por consiguiente, posee un excedente para repartir del que carecen los gobiernos estatales y municipales. Los recursos recaudados en el ámbito nacional pueden, por tanto, canalizarse a programas que los gobiernos estatales y municipales, a menudo estrechamente ligados a los intereses creados locales, nunca aprobarían. El indigenismo llegó a Chiapas como un programa federal, aunque pronto atrajo a seguidores y protagonistas locales.<sup>66</sup> Además, el gobierno federal tiene un evidente interés en utilizar esos programas para debilitar el poder de las élites provincianas (especialmente cuando —como en el caso de Yucatán, por ejemplo— muestran sentimientos provincianos, incluso secesionistas; o cuando, como en el caso de Cedillo en San Luis, se resisten al control político del “centro”). El gobierno federal también actúa bajo la mirada de la prensa, del público metropolitano y de la opinión extranjera. Está bastante preparado para ofender a los tres, como lo reveló 1968, pero en general prefiere pulir su imagen, sobre todo cuando la integración económica estadounidense avanza firmemente. Por consiguiente, el gobierno nacional quiere que lo vean jugando *softball*; quiere lograr un ajuste burdo entre teoría y práctica. No es una buena publicidad que paracaidistas del Distrito Federal sean asesinados por pirómanos,<sup>67</sup> ni que gobernadores de los estados fronterizos —como Carlos Armando Briebrich de Sonora— sean considerados violentos y corruptos,<sup>68</sup> ni tampoco que las ciudades fronterizas sean testigos de huelgas de hambre o del bloqueo de puentes internacionales. Así, en parte, el afán del gobierno para lograr un *modus vivendi* con el PAN en el norte es mayor que para lograrlo con el PRD en Michoacán. Desde un punto de vista más positivo, los programas antipobreza y de renovación urbana en el Distrito Federal pueden considerarse trofeos de la reforma social: Solidaridad nació concep-

---

<sup>66</sup> Robert Wasserstrom, *Class and Society in Central Chiapas*, Berkeley, University of California Press, 1983, pp. 162-164; y Jan Rus, “The Comunidad Revolucionaria Institucional: The Subversion of Native Government in Highland Chiapas, 1936-1968”, en Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (eds.), *Everyday Forms of State Formation, Revolution and the Negotiation of Rule in Mexico*, Durham, Duke University Press, pp. 272-280.

<sup>67</sup> Cornelius, *op. cit.*, p. 38.

<sup>68</sup> Johnson, *op. cit.*, pp. 182-183.

polos del espectro político sigan creyendo su propia versión de lo que en realidad sucedió.

En gran parte podría hacerse la misma observación para la década de los años treinta, basándonos en las abundantes pruebas archivadas, especialmente en la Dirección General de Gobierno. También se podría suponer que se hacen cálculos similares cuando el ejecutivo examina y resuelve mediante concertaciones las elecciones impugnadas de gobernadores.

Un efecto de este proceso es que la violencia se aleja del centro y se considera perpetrada localmente (por pistoleros, guardias blancas o asesinos anónimos). Las “desapariciones” son obra, no de los militares sino de oscuros agentes locales. En realidad, los militares pueden desempeñar a veces el papel de guardianes de la paz. México, para su gran fortuna, no ha vivido una guerra sucia, pero existen muchos ejemplos de miniguerras sucias, manejadas subrepticamente en la provincia con asesinatos, intimidación y desapariciones, ninguno de los cuales es novedad. No obstante, mientras que en Argentina los militares reprimieron abiertamente y proclamaron su doctrina oficial de seguridad nacional, en México los militares han sido, por lo general, mantenidos a raya y la represión ocurre local, esporádica y oscuramente, deplorada por un régimen cuya doctrina oficial es la de inclusión, democracia y reforma. Al sistema político mexicano puede dársele el crédito de haber evitado los horrores del autoritarismo burocrático totalmente emplumado, pero esto se ha logrado, en buena parte, desplazando el conflicto político violento a la penumbra de la provincia, permitiendo —y quizá fomentando a veces— un grado de represión descentralizada que puede negarse. Chiapas es un ejemplo obvio, pero el fenómeno no se limita a las distantes periferias de América Central: Sinaloa ofrece, otra vez, la contraparte nortea; la reciente violencia en Aguas Blancas no es sino otro capítulo de la larga historia de violencia y represión en Guerrero.<sup>70</sup>

Una ventaja adicional de esta articulación es que el presidente permanece por encima del conflicto. El poder y el prestigio de la presidencia mexicana han sido ampliamente comentados.<sup>71</sup> Si parecían faltar a mediados de los ochenta, desde entonces se han más que re-

---

<sup>70</sup> *Proceso*, núm. 921, 27 de junio de 1994, pp. 31-33; y núm. 975, 10 de julio de 1995, pp. 18-21.

<sup>71</sup> L. Vincent Padgett, *The Mexican Political System*, Boston, Houghton Mifflin, 1966, cap. 6; y George Philip, *The Presidency in Mexican Politics*, Londres, Macmillan, 1992.

ve intolerable”.<sup>74</sup> En México, podemos suponer que se ha mantenido una pequeña cantidad de coherencia cognoscitiva en el país (de ahí el “componente grande de expectativa” de la cultura política mexicana propuesto por Almond y Verba);<sup>75</sup> la incoherencia se ha desplazado a la localidad, donde la práctica del *hardball* difícilmente corresponde a normas constitucionales o retóricas, dando así origen a altos índices de enajenación y cinismo.

Por supuesto, Almond y Verba escribieron en los sesenta. Desde entonces, México ha cambiado significativamente. De acuerdo con algunas opiniones, la educación, la urbanización, el consumismo y la “modernización” (sea lo que fuere que esto significa) tienden a erosionar la antigua manera de hacer política, minando el caciquismo, creando una ciudadanía más quejosa y sofisticada, eliminando de esta manera el síndrome del *hardball*, o quizá confinándolo a las regiones más remotas y atrasadas del país (casualmente favorecidas por los antropólogos). Esta cuestión es demasiado amplia para abordarla al final de un artículo. Simplemente registraré una ligera objeción. Los caciques van y vienen: la “modernización” de los ochenta vio el nacimiento y la muerte de los cacicazgos.<sup>76</sup> Los caciques provincianos —Gonzalo Santos en San Luis Potosí, la dinastía de los Figueroa en Guerrero— podían jugar el *hardball* local, mientras se codeaban con los presidentes en los civilizados salones del Distrito Federal. En general, los sistemas de caciques han demostrado ser compatibles con una diversidad de sociedades, inclusive sociedades urbanas; el desarrollo económico puede provocar, así como mitigar, los antagonismos sociales. Ya se mencionaron las violentas consecuencias de los auges del café o de las bonanzas de la droga. Los conflictos políticos, como la elección presidencial de 1988, pueden dejar un legado de confrontación y violencia. De esta manera, aun si el avance de la “modernización” tiene de verdad los amplios efectos civilizadores que tan a menudo y tan optimista-

---

<sup>74</sup> Przeworski, *op. cit.*, p. 3.

<sup>75</sup> Una pregunta importante —aunque va más allá del alcance de este artículo— es hasta dónde perdura este “componente de expectativa”; en otras palabras, hasta cuándo los mexicanos siguen considerando a su gobierno una fuerza potencial para el bien. Los datos de las casillas electorales —así como de otras fuentes— sugieren que este caudal de legitimidad, todavía aparente en 1993, ha disminuido rápidamente desde entonces; que el cinismo público ha ido en aumento y, según un crítico, “el espacio entre la palabra y el acto” se ha ensanchado, abriendo un “vacío entre el discurso político y la acción gubernamental” (Castañeda, 1995, p. 42). Los gobiernos anteriores —notoriamente Salinas— lograron cerrar esta brecha de credibilidad. Está por verse si podrá hacerlo el presidente Zedillo.

<sup>76</sup> *Proceso*, núm. 834, 26 de octubre de 1992, p. 32.



muerta. Además, los militares parecían menos dispuestos a mantener la lucha entre las fuerzas rivales locales que a comprometerse en una represión de guerrilleros que tenía más que el olor a Centroamérica. Por otra parte, las reacciones gubernamentales al levantamiento zapatista fueron distintas —no centroamericanas, se podría decir— y tienden a confirmar mis argumentos anteriores. Después de una respuesta inicial de línea dura, el gobierno optó por el diálogo en lugar de la represión. Los militares fueron refrenados, rodaron algunas cabezas políticas y el PRI chiapaneco sufrió una purga. El gobierno federal se mostró receptivo a la opinión tanto nacional como mundial: combinó un rápido juego de pies con una extraña demostración de contricción pública, dio marcha atrás a las políticas públicas, murmuró un modesto *mea culpa* y envió a Camacho y a Ruiz como mediadores. Esto acarreo enormes costos políticos: una pérdida de la credibilidad, un desafío a los fuertes intereses creados de Chiapas, un rechazo al ejército, un respaldo a la autoridad del obispo Ruiz, y —quizá lo más importante de todo— la promoción de Camacho, que socavó la incipiente campaña presidencial de Colosio. Sin embargo, estos costos (supuestamente) habrán valido la pena si el gobierno federal evitó así una represión radical y logró conservar su reputación de mediador ilustrado y reformista. Chiapas, largamente adiestrado en la política del *hardball*, jugaría ahora según las reglas más decorosas del *softball*. Por supuesto, los acontecimientos han seguido su curso; un diálogo prolongado y tartamudo ni ha impedido los incidentes violentos ni ha garantizado una solución pacífica. Pero en tanto este último siga siendo una opción, la política del *softball* seguirá teniendo una oportunidad. En esta medida, la cultura política “esquizoide” de México sigue vigente.

Si el caso de Chiapas se adapta aceptablemente bien al modelo, los asesinatos políticos de 1994 probablemente no lo hacen. Digo “probablemente” porque, como la mayoría de los observadores, ahora y tal vez en el futuro, sólo puedo adivinar la importancia real de estos acontecimientos. Si, por ejemplo, la muerte de Colosio fue obra de un asesino solitario o, más probablemente, de una conspiración limitada local, podría ser riesgoso extraer conclusiones generales. Los asesinatos al azar, aunque sean graves sus repercusiones, no necesariamente son síntomas de una sociedad patológica. El asesinato de Olof Palme no mostró ni condujo a un caos político en Suecia. Los análisis instantáneos que ponen juntos a Chiapas y a Tijuana y llegan a conclusiones apocalípticas deben ser cuestionados. No obstante, si el asesinato de Colosio fue, como muchos se inclinan a pensar, una conspiración de

también la cohesión y la coexistencia de la élite interna, con indeseables consecuencias para el sistema político mexicano. En otras palabras, Chiapas fue un síntoma, aunque haya sido extremo, de la condición crónica que describí anteriormente. Pero por esa misma razón no fue ni dramáticamente nuevo ni del todo resistente al antiguo tratamiento. Lomas Taurinas, en cambio, puede anunciar un nuevo punto de partida o, no menos gravemente, una regresión a los antiguos patrones anteriores a 1930 de la política de élites, de dientes y garras rojos. En vista de los problemas económicos y de política interna que actualmente enfrenta y de la imagen internacional que con desesperación trata de reforzar, la élite priísta difícilmente puede encarar un descenso a la política del *hardball*.